

Plaza Pública para la edición del 12 de noviembre de 1996
Intimidación y muerte
por miguel ángel granados chapa

Dos sucesos reconfortantes en el largo y accidentado camino a la paz en Chiapas se vieron de inmediato nublados por episodios de sangre e intimidación que estorban ese proceso. Tales obstáculos serían por eso relevantes de suyo, pero lo son más porque revelan que la violencia autoritaria se resiste a ser extirpada.

Aunque con demora, fue muy buena noticia el que se haya instalado la Comisión de Seguimiento y Verificación. Se trata de un hecho digno de ser saludado por muchos motivos. Primero, porque elimina un escollo para la reanudación del diálogo de San Andrés, ya que fue una de las causas alegadas por el zapatismo armado para su retiro de esa instancia de negociación. En segundo lugar, porque incorpora a los trabajos por la paz a un grupo de mexicanas y mexicanos volcados a la mejoría de la vida pública en nuestro país. (Fue significativo que por la parte gubernamental hablara en la ceremonia de instalación Luis Medina Peña, un político formado en la tarea académica que por lo tanto hace uso de la razón en vez de apelar a la fuerza o a la imposición unilateral). En último término, porque el establecimiento de ese grupo de trabajo resultó de una útil labor de la Cocopa, la comisión legislativa para la concordia y la pacificación, que de esa manera se fortaleció como instancia coadyuvante al diálogo.

La Cocopa consiguió también instalar una mesa

¿CUÁL DESTINO PARA EL DF?

Carlos Martínez Assad

A Carlota y Samuel, para quienes el DF siempre fue un lugar lejano

especial para atender casos aledaños a la negociación pero que la estorban. Se está ocupando ya, por ejemplo, de un conflicto postelectoral en la propia sede de las conversaciones, en el municipio de San Andrés, Lejos de ser impropio que ese asunto se ventile en la mesa que reúne al zapatismo armado y al gobierno federal, su abordamiento allí es imprescindible ya que todo tiene que ver con todo en Chiapas, pues la trama del conflicto social es muy apretada. Más allá de la disputa por la autoridad municipal en San Andrés, en efecto, está el litigio entre comunidades indígenas, alentado por intereses que utilizan la intimidación y la muerte como instrumentos de acción política. A ese estilo corresponden los letreros intimidatorios que han surgido en Oventic, donde un presunto nuevo grupo intimidante, Máscara Roja, introduce un nuevo ingrediente en la feria de confusiones y violencia por medio de la cual buscan su preservación los intereses creados chiapanecos.

Esos intereses actuaron la semana pasada de modo directo contra agrupaciones civiles que han favorecido el proceso de paz en Chiapas. Por tercera vez en dos meses, atentaron contra el domicilio de Compaz, una oficina coordinadora de una decena de comités y centros de acción social y ciudadana con sede en San Cristobal de las Csas. Esta vez consiguieron quemar parte de las instalaciones, y sólo la oportuna intervención de los bomberos impidió la destrucción buscada por los atacantes. No todos sus propósitos se frustraron, sin embargo: consiguieron

Introducción

intimidar a algunos miembros de esa coordinadora. Se recrudecieron previas amenazas telefónicas contra varios de ellos y el contador, Javier López Montoya, fue secuestrado durante unas horas, lo mismo que su esposa y sus pequeños hijos. Tan grave fue el mensaje recibido de su captores por López Montoya, que se ha rehusado a presentar la denuncia correspondiente.

Las amenazas telefónicas a los miembros de Compaz en San Cristobal, citados puntualmente por su nombre en mensajes dejados en una contestadora telefónica, tienen claro parentesco con los recados intimidatorios que, a cientos de kilómetros de distancia han recibido abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de los jesuitas, que se han significado en la defensa de presuntos zapatistas presos. El discernimiento de un premio norteamericano al director de ese centro, David Fernández, exacerbó el ánimo de sus permanentes detractores, que no sólo activaron la permanente campaña de desprestigio que inútilmente sostienen en torno suyo, sino que el domingo anterior enviaron un nuevo recado con amenazas a él y sus colaboradores.

En las amenazas telefónicas contra Compaz y en el mensaje intimidante de anteayer se nota un creciente desparpajo de los sujetos que los enviaron. Ciertos de que no se investiga su actividad, no obstante denuncias anteriores, en San Cristobal demoran en largas llamadas telefónicas sin temor de que el punto de emisión pueda ser localizado. Y en la ciudad de México ya no se limitaron a

La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPC), no obstante, fue aprobada por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF), apoyada solamente por la mayoría calificada del PRI y con la abstención de los partidos de oposición. Mal primer paso para una acción que, en principio, encerraba posibilidades para ofrecer algunas, entre muchas, propuestas de solución a la participación ciudadana organizada en la ciudad más grande del mundo.

En esos días, recibí una llamada telefónica en mi cubículo de investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Mi amigo y colega Francisco José Paoli Bolio, con quien me unen varios años de trabajo dedicados a analizar la historia y el presente del país, me invitaba en nombre del PAN para proponerme entre los “consejeros” que debían orientar las elecciones de consejeros ciudadanos del 12 de noviembre. Tenía prisa, y sin embargo, le pedí unas horas para pensar bien en el asunto. Debía hacer algunas llamadas que me permitieran normar mi criterio sobre la responsabilidad que dicha invitación significaba. Como en tantas otras empresas en mi vida, hablé detenidamente con Sara Sefchovich; me recordó mis opiniones en diferentes publicaciones sobre los procesos de ciudadanización y la magnífica oportunidad para llevar a la práctica algunas de esas ideas. Después, Carlos Monsiváis fue tan convincente como siempre que se lo propone.

Me pareció importante la propuesta cuando pensé que después de sesenta años, la ciudad de México volvería a tener elecciones locales, y la vía que se abría a la ciudadanización de un proceso político. Se trataba de realizar elecciones que organizarían los ciudadanos, para elegir entre ciudadanos a los integrantes de los consejos que, entre otras funciones, sancionarían los programas de gobierno de los delegados. Entonces, no comprendí los alcances de la responsabilidad que asumía, mayor aún cuando el intento oficialista de imponer a un coordinador cercano a sus posiciones, hizo que los representantes de los partidos de oposición y los comisionados independientes al Comité Central se unieran para que se me ubicara como responsable de la dirección de los trabajos que debían realizarse.

depositar los anónimos amagantes en el huzón del centro jesuita de derechos humanos. Con peligrosa desfachatez, el recado fue entregado en propia mano a la abogada Digna Ochoa, ya antes amenazada de muerte.

Ni el conflicto en San Andrés ni las amenazas en San Cristobal han podido ser atajados por el gobierno local, dotado de mayor efectividad para crear litigios que para resolverlos. Así lo muestra la reproducción del atentado de Aguas Blancas, ahora en Laja Tirada, municipio de Venustiano Carranza, una zona muy explosiva en Chiapas. Allí el sábado pasado fueron muertos a tiros, por la policía, tres campesinos que obstruían una carretera federal en demanda de mejores precios al maíz que producen. El gobierno los acusa de haber asaltado y aun quemado vehículos. Pero aun siendo cierta esa especie (y tenemos derecho a dudar que lo sea, luego del montaje intentado en Aguas Blancas y las mentiras contadas en una agresión análoga a vecinos de Tepoztlán), la agresión policíaca fue desproporcionada e ignorante de un entorno peligroso.

Su explosivo crecimiento demográfico, económico, social y cultural, sobre todo desde los años sesenta, llevó a que se definiera a la ciudad de México como *megalópolis*, porque la mancha urbana se desparrama, engulle todo lo que encuentra a su paso hasta extenderse a los municipios conurbados del Estado de México, Morelos e Hidalgo, como si sus límites se acercaran cada vez más a Toluca, Cuernavaca, Puebla, Pachuca y Querétaro.²

La delimitación de la ciudad de México, pese a numerosos esfuerzos, no se ha resuelto del todo; hay que tratar de entender los vínculos entre sus áreas urbanas y sus zonas metropolitanas porque “[...] el fenómeno urbano [de la ciudad de la ciudad de México está] de modo más apegado a la realidad geográfica, ecológica y socioeconómica y demográfica [que] lo que en términos genéricos se denomina ciudad”.³

“Ciudad tan complicada”, dice Efraín Huerta en su “Declaración de odio”, porque todo pasa y deja huella en las conciencias más que en sus trazos urbanos; ciudad de “llanto y sudor molidos” que expresa la metáfora de sus sufrimientos, de sus querellas, de su alma nostalgia, de las afrentas y las tragedias. Ciudad de los espacios contruidos y de su cauda de destrucción, porque lo nuevo y lo viejo se funden en una contradicción que no acaba de resolverse.

Los sentimientos son encontrados; ¿qué hacer? y ¿qué sentido tiene hacerlo?, son las preguntas del pesimismo de los últimos tiempos: saber que los cambios son necesarios y no encontrar las vías para hacerlos. No es ya suficiente comprometerse en términos declarativos con la democracia, como lo han entendido varias organizaciones surgidas de las bases sociales que, identificadas hasta cierto punto como Organizaciones No Gubernamentales (ONG), actúan buscando alcanzar expectativas sociales que el gobierno no puede satisfacer.

No dejar ni esperar del Estado el cumplimiento de todos los satisfactores, de aquello que nos permita sobrellevar “Los días pesadísimos[...] los días enturbiados[...] los días incendiarios”, como dice el mismo Efraín Huerta.

La ciudad de México, como caja de resonancia del acontecer del país, es sede del despertar ciudadano, del resurgimiento de la cultura cívica que encuentra

PLAZA PÚBLICA
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

Intimidación y muerte

Aunque la Cocopa haya conseguido encaminar a las partes de nuevo hacia el diálogo de San Andrés, surgen obstáculos peligrosos que aun llegan al derramamiento de sangre y que incrementan la explosividad de la comarca.



DOS SUCESOS RECONFORTANTES EN EL LARGO Y ACCIDENTADO camino a la paz en Chiapas se vieron de inmediato nublados por episodios de sangre e intimidación que estorban ese proceso. Tales obstáculos serían por eso relevantes de suyo, pero lo son más porque revelan que la violencia autoritaria se resiste a ser extirpada.

Aunque con demora, fue muy buena noticia el que se haya instalado la Comisión de Seguimiento y Verificación. Se trata de un hecho digno de ser saludado por muchos motivos. Primero, porque elimina un escollo para la reanudación del diálogo de San Andrés, ya que fue una de las causas alegadas por el zapatismo armado para su retiro de esa instancia de negociación. En segundo lugar, porque incorpora a los trabajos por la paz a un grupo de mexicanas y mexicanos volcados a la mejoría de la vida pública en nuestro país (fue significativo que por la parte gubernamental hablara en la ceremonia de instalación Luis Medina Peña, un político formado en la tarea académica que por lo tanto hace uso de la razón en vez de apelar a la fuerza o a la imposición unilateral). En último término, porque el establecimiento de ese grupo de trabajo resultó de una útil labor de la Cocopa, la Comisión legislativa para la Concordia y la Pacificación, que de esa manera se fortaleció como instancia coadyuvante al diálogo.

La Cocopa consiguió también instalar una mesa especial para atender casos aledaños a la negociación pero que la estorban. Se está ocupando ya, por ejemplo, de un conflicto postelectoral en la propia sede de las conversaciones, en el municipio de San Andrés. Lejos de ser impropio que ese asunto se ventile en la mesa que reúne al zapatismo armado y al gobierno federal, su abordamiento allí es imprescindible ya que todo tiene que ver con todo en Chiapas, pues la trama del conflicto social es muy apretada. Más allá de la disputa por la autoridad municipal en San Andrés, en efecto, está el litigio entre comunidades indígenas, alentado por intereses que utilizan la intimidación y la muerte como instrumentos de acción política. A ese estilo corresponden los letreros intimidatorios que han surgido en Oventic, donde un presunto nuevo grupo intimidante, Máscara Roja, introduce un nuevo ingrediente en

la feria de confusiones y violencia por medio de la cual buscan su preservación los intereses creados chiapanecos.

Esos intereses actuaron la semana pasada de modo directo contra agrupaciones civiles que han favorecido el proceso de paz en Chiapas. Por tercera vez en dos meses, atentaron contra el domicilio de Conpaz, una oficina coordinadora de una decena de comités y centros de acción social y ciudadana con sede en San Cristóbal de las Casas. Esta vez consiguieron quemar parte de las instalaciones, y sólo la oportuna intervención de los bomberos impidió la destrucción buscada por los atacantes. No todos sus propósitos se frustraron, sin embargo; consiguieron intimidar a algunos miembros de esa coordinadora. Se recrudecieron previas amenazas telefónicas contra varios de ellos y el contador, Javier López Montoya, fue secuestrado durante unas horas, lo mismo que su esposa y sus pequeños hijos. Tan grave fue el mensaje recibido de sus captores por López Montoya, que se ha rehusado a presentar la denuncia correspondiente.

Las amenazas telefónicas a los miembros de Conpaz en San Cristóbal, citados puntualmente por su nombre en mensajes dejados en una con-

testadora telefónica, tienen claro parentesco con los recados intimidatorios que, a cientos de kilómetros de distancia han recibido abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, de los jesuitas, que se han significado en la defensa de presuntos zapatistas presos. El discernimiento de un premio norteamericano al director de ese centro, David Fernández, exacerbó el ánimo de sus permanentes detractores, que no sólo activaron la permanente campaña de desprestigio que inútilmente sostiene en torno suyo, sino que el domingo anterior enviaron un nuevo recado con amenazas a él y sus colaboradores.

En las amenazas telefónicas contra Conpaz y en el mensaje intimidante de anteayer se nota un creciente desparpajo de los sujetos que los envían. Ciertos de que no se investiga su actividad, no obstante denuncias anteriores, en San Cristóbal demoran en largas llamadas telefónicas sin temor de que el punto de emisión pueda ser localizado. Y en la ciudad de México ya no se limitaron a depositar los anónimos amagantes en el buzón del centro jesuita de derechos humanos. Con peligrosa desfachatez, el recado fue entregado en propia mano a la abogada Digna Ochoa, ya antes amenazada de muerte.

Ni el conflicto en San Andrés ni las amenazas en San Cristóbal han podido ser atajados por el gobierno local, dotado de mayor efectividad para crear litigios que para resolverlos. Así lo muestra la reproducción del atentado de Aguas Blancas, ahora en Laja Tirada, municipio de Venustiano Carranza, una zona muy explosiva en Chiapas. Allí el sábado pasado fueron muertos a tiros, por la policía, tres campesinos que obstruían una carretera federal en demanda de mejores precios al maíz que producen. El gobierno los acusa de haber asaltado y aun quemado vehículos. Pero aun siendo esa especie (y tenemos derecho a dudar que lo sea, luego del montaje intentado en Aguas Blancas y las mentiras contadas en una agresión análoga a vecinos de Tepoztlán), la agresión policiaca fue desproporcionada e ignorante de un entorno peligroso.

• • •

CAJÓN DE SASTRE

Es alentador que un político cuya formación lo hace valorar la eficacia de la razón por encima de la fuerza o la imposición, Luis Medina Peña forme parte eminente de la representación gubernamental en la comisión de seguimiento.

El ex diputado federal Jorge Zermeño Infante será el primer alcalde panista de Torreón, pero no es la primera vez que su partido obtiene el triunfo en la contienda por esa alcaldía. Hace 18 años, el también diputado Edmundo Gurza ganó las elecciones, pero el gobernador Oscar Flores Tapia se empeñó en negar esa victoria. Contó para eso con el apoyo del entonces presidente López Portillo que en reunión con los líderes panistas aceptó que el PRI perdiera Monclova, pero "Torreón se queda como está", dijo. Es preciso tener en cuenta este precedente para comprender desde cuándo se fragua el ascenso panista en Coahuila.